

ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1. INTRODUCCION

El artículo 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, estableció como deber de las entidades estatales el realizar, durante la etapa de planeación, el análisis del sector económico y de los oferentes.

Es así que este documento, presenta el estudio del sector para "Contratar la prestación de servicios a nivel servicios a nivel Profesional Especializado, Profesional, Técnico, Asistencial y de apoyo a la gestión en todas las actividades administrativas y operativas del Concejo Municipal de Jamundí – Valle del Cauca, en el cual el organismo establece claramente cuál es su necesidad y determina la mejor manera en que el mercado puede satisfacerla.

Con este análisis se orienta a la Entidad, en la definición de requisitos habilitantes y técnicos del proceso si es el caso, así como en la caracterización de su mercado e identificación de posibles riesgos del proceso precontractual, contractual y poscontractual.

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA RESPONSABILIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ

El Concejo Municipal de Jamundí, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 136 de 1994, la Mesa Directiva de los Concejos se compondrá de un (01) presidente y dos (02) vicepresidentes, elegidos separadamente para un período de un (01) año.

Que en cumplimiento del acuerdo No 027 de noviembre 28 de 2024, Por medio del cual se adopta un nuevo reglamento interno del Concejo municipal de Jamundí, en su Artículo 35 Numeral 24 el presidente cumple la función de ordenador del gasto y la ejecución presupuestal de la corporación.

2.1. PLANTA DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE JAMUNDÍ

Que mediante Resolución No.064 de octubre 20 de 2017 *"Por medio de la cual se modifica la estructura administrativa y se adopta una nueva planta de personal en el honorable concejo municipal de Jamundí y se dictan otras disposiciones"*, El Concejo Municipal de Jamundí, a efecto de atender sus responsabilidades, tiene a su servicio una planta de personal conformada de la siguiente manera:



CONCEJO

MUNICIPAL DE JAMUNDÍ
Valle del Cauca

PLANTA DE EMPLEOS PROPUESTA					
No. CARGOS	DENOMINACIÓN DEL CARGO	CÓDIGO	GRADO	NIVEL	CONDICIÓN
1	Secretario General	054	01	Directivo	Periodo Fijo
1	Profesional Universitario	219	02	Profesional	Carrera Administrativa
1	Profesional Universitario	219	01	Profesional	Carrera Administrativa
1	Secretario	440	08	Asistencial	Carrera Administrativa
1	Secretario	440	02	Asistencial	Carrera Administrativa
3	Auxiliar Administrativo	407	07	Asistencial	Carrera Administrativa
3	Auxiliar Administrativo	407	04	Asistencial	Carrera Administrativa
3	Auxiliar Administrativo	407	03	Asistencial	Carrera Administrativa
1	Auxiliar de Servicios Generales	470	05	Asistencial	Carrera Administrativa
2	Auxiliar de Servicios Generales	470	04	Asistencial	Carrera Administrativa
7	Ayudante	472	01	Asistencial	Carrera Administrativa
24	TOTAL EMPLEOS				

Tabla 1. Planta de empleos propuesta.

De acuerdo a lo anterior se evidencia la precariedad del recurso humano que tiene la Corporación Concejo Municipal de Jamundí para cumplir con sus funciones, teniendo en cuenta que la escasez de funcionarios especializados genera sobrecarga laboral en quienes actualmente desempeñan tareas, afectando la eficiencia institucional.

Así mismo la falta de formación específica en áreas clave como derecho administrativo, planeación territorial, gestión presupuestal y la limitación del recurso humano se traduce en dificultades para ejercer el control político, pues no se cuenta con asesores técnicos suficientes para analizar proyectos de acuerdo afectando la función normativa, ya que la elaboración de acuerdos municipales requiere conocimientos jurídicos y administrativos que no siempre están disponibles en la planta de personal.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Con base en las funciones y responsabilidades asignadas al Concejo Municipal de Jamundí, se identifica que la Corporación presenta un déficit de personal en términos de calidad y formación específica en áreas clave.

Lo anterior, con ocasión de la Reforma Administrativa implementada en el año 2.007 la cual originó una reducción en la estructura orgánica del Concejo Municipal de Jamundí.

Aun cuando se cuenta con una planta de cargos que dirige la ejecución de los procesos misionales de la dependencia, el recurso humano es insuficiente para atender la totalidad de las funciones asignadas por la Constitución Política y las normas que aplican a esta corporación.

La reforma administrativa aquí enunciada origina diversas situaciones de insuficiencia de personal así: 1) No existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, 2) Aun existiendo personal en la planta de cargos, la escasez de funcionarios especializados genera sobrecarga laboral en quienes actualmente desempeñan tareas, afectando la eficiencia institucional. 3) El desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio.

No obstante, la planta de personal actual presenta limitaciones significativas en cuanto a número e idoneidad suficiente, lo que impide atender de manera adecuada las responsabilidades propias de las áreas y procesos internos de la Corporación. Esta situación genera una afectación directa

en el desempeño institucional, comprometiendo la eficacia, eficiencia y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.

Teniendo en cuenta que el Concejo Municipal de Jamundí, como corporación administrativa de elección popular, tiene a su cargo funciones constitucionales y legales de carácter normativo, de control político y de representación ciudadana, resulta indispensable contar con un recurso humano idóneo y suficiente para garantizar el cumplimiento de dichas responsabilidades.

En virtud de lo anterior, y atendiendo al principio de eficacia consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, así como a las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 en materia de contratación estatal, se configura una razón objetiva y jurídicamente válida para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Dichos contratos constituyen un mecanismo legal y legítimo que permite suplir la insuficiencia de personal, garantizando la continuidad de la misión institucional del Concejo Municipal y favoreciendo el logro de los objetivos y metas trazadas en el marco de la planeación territorial y del cumplimiento de las funciones constitucionales y legales asignadas.

En consecuencia, para el desarrollo de las funciones de la Corporación, se requiere personal profesional en diferentes áreas (contadores públicos, abogados, Comunicación y periodismo, administradores de empresas etc), los cuales prestarían sus servicios en los diferentes procesos a desarrollar en el Concejo Municipal de Jamundí.

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesaria la contratación de personal profesional para garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de carácter normativo asignadas a la Corporación, según la necesidad y continuidad de cada uno de sus procesos.

3. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

3.1. Aspecto económico macro

El crecimiento de la economía mundial muestra señales de estabilización, en la medida en que la inflación converge gradualmente hacia las metas establecidas por los bancos centrales y la flexibilización de la política monetaria contribuye a respaldar la actividad económica. En este contexto, se proyecta una expansión global moderada cercana al 2,7 % para el período 2025-2026.

No obstante, estas perspectivas resultan insuficientes para compensar los efectos acumulados de varios años de choques adversos. La elevada incertidumbre en materia de política económica, junto con cambios desfavorables en las políticas comerciales, constituye uno de los principales riesgos a la baja. A ello se suman factores como el aumento de las tensiones geopolíticas, la posibilidad de presiones inflacionarias persistentes y la ocurrencia de eventos climáticos extremos.

Frente a este panorama, se hace necesario adoptar políticas económicas oportunas y coordinadas que permitan salvaguardar el comercio internacional, mitigar las vulnerabilidades asociadas al endeudamiento, enfrentar los efectos del cambio climático, preservar la estabilidad de precios, fortalecer la recaudación fiscal y optimizar la eficiencia del gasto público. Asimismo, resulta fundamental impulsar el capital humano y promover una mayor inclusión en el mercado

laboral.

3.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) a nivel Mundial

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial evidencia una desaceleración, asociada principalmente al incremento de las barreras comerciales y al aumento de la incertidumbre respecto a las políticas económicas. Se estima que el crecimiento global se reducirá hasta 2,3 % en 2025, lo que representa una revisión a la baja frente a proyecciones anteriores, con una recuperación apenas gradual durante el período 2026-2027.

Este desempeño podría deteriorarse aún más en un escenario de mayores restricciones al comercio internacional o de persistencia en la incertidumbre sobre las políticas públicas. Entre los riesgos adicionales se destacan un menor crecimiento en las principales economías, la intensificación de conflictos geopolíticos y la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos.

En este contexto, se requieren esfuerzos coordinados de política multilateral orientados a promover un entorno económico más previsible y transparente, que facilite la resolución de tensiones comerciales. De manera complementaria, los responsables de la formulación de políticas deben continuar garantizando la estabilidad de precios y el fortalecimiento de los balances fiscales, al tiempo que impulsan reformas estructurales dirigidas a mejorar la calidad institucional, estimular la inversión privada, fortalecer el capital humano y optimizar el funcionamiento del mercado laboral.

3.2. Aspecto económico nacional

Para el mes de octubre de 2025, el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE), en su serie original, se ubicó en 127,42, lo que representó un crecimiento del 2,95 % frente al mismo mes de 2024pr, cuando se registró un nivel de 123,77.

De igual manera, el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario alcanzó un valor de 127,32 en octubre de 2025pr, evidenciando un incremento del 2,83 % en comparación con octubre de 2024pr, período en el cual se situó en 123,81.

3.2.1. Producto Interno Bruto (PIB)

En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).
- Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

En lo corrido del año 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,8%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%.
- Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.
- Industrias manufactureras crece 1,5%

Tasas de crecimiento en volumen¹
Tercer trimestre 2025^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025 ^{Pr} -III / 2024 ^{Pr} -III	2025 ^{Pr} / 2024 ^{Pr}	2025 ^{Pr} -III / 2025 ^{Pr} -II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,4	4,1	1,0
Explotación de minas y canteras	-5,7	-7,2	0,8
Industrias manufactureras	4,1	2,1	1,5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	2,3	0,7	0,7
Construcción	-1,5	-2,7	1,1
Comercio al por mayor y al por menor ³	5,6	5,1	0,2
Información y comunicaciones	1,9	1,8	0,4
Actividades financieras y de seguros	4,3	3,5	2,3
Actividades inmobiliarias	2,1	2,0	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	1,1	1,3	-0,1
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	8,0	4,4	3,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	5,7	9,4	1,0
Valor agregado bruto	3,6	2,8	1,3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,7	2,5	0,9
Producto Interno Bruto	3,6	2,8	1,2

Tabla 2. Tasa de crecimiento PIB 2025

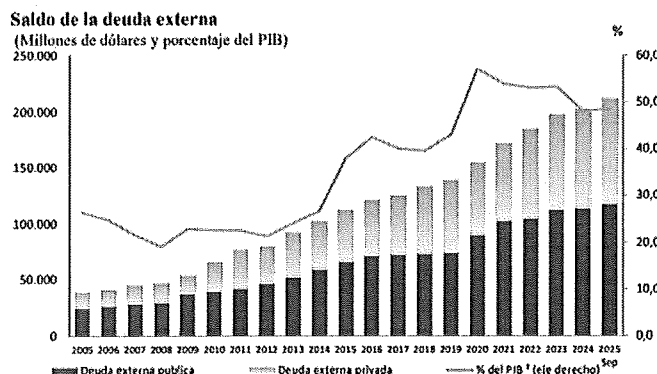
3.2.2. La deuda externa de Colombia

El Banco de la Republica reporta la siguiente información en término de enero a septiembre de 2025, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó US\$211.584 millones (m) (48,6% del PIB1), aumentando US\$9.879 m (4,9%) respecto a diciembre de 2024². El 84% de este monto corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año y el 16% a créditos con vencimiento igual o menor a un año. Por tipo de instrumento, el saldo de la deuda externa

corresponde principalmente a préstamos y bonos.

El aumento del saldo al término de septiembre de 2025 (US\$9.879 m) frente a diciembre de 2024, se explica por el incremento de la deuda tanto de largo plazo (US\$8.441 m, 5%) como de corto plazo (US\$1.438 m 4,4%). Por sectores, el saldo de la deuda externa pública representa el 55,8% del total y la del sector privado el 44,2.

Del monto total de la deuda externa, el 16% corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa.



Grafica 1. Saldo de la deuda externa

3.2.3. Deuda externa del sector público

A septiembre de 2025, el saldo de la deuda externa del sector público se estima en US\$118.135 m (27,9% del PIB), superior en US\$4.940 m (4,2%) respecto a diciembre de 2024 (Gráfico 2). Esta dinámica se explica por el aumento de las obligaciones de largo plazo (US\$4.912 m) y por la reducción de las de corto plazo (US\$96 m).

Por tipo de acreedor, el mayor saldo de la deuda externa del sector público³ (US\$4.912 m) obedeció principalmente al aumento de las obligaciones con los tenedores de bonos (US\$5.102 m), con la banca comercial (US\$563 m) y con la banca bilateral (US\$362 m) compensado parcialmente por la reducción de las obligaciones con organismos internacionales (US\$1.116 m).

Del saldo de la deuda del sector público, el 70% corresponde a obligaciones del gobierno nacional, el 21% a entidades descentralizadas y el restante 9% son obligaciones de otros deudores. Por prestamistas, el 56% del saldo corresponde a bonos emitidos en los mercados internacionales, el 31% a préstamos con la banca multilateral y el 13% a créditos con entidades bilaterales e instituciones financieras.

Del saldo total de la deuda externa del sector público, el 95% está en cabeza de entidades no bancarias y el restante son obligaciones del sector bancario

3.2.4. Deuda externa del sector privado

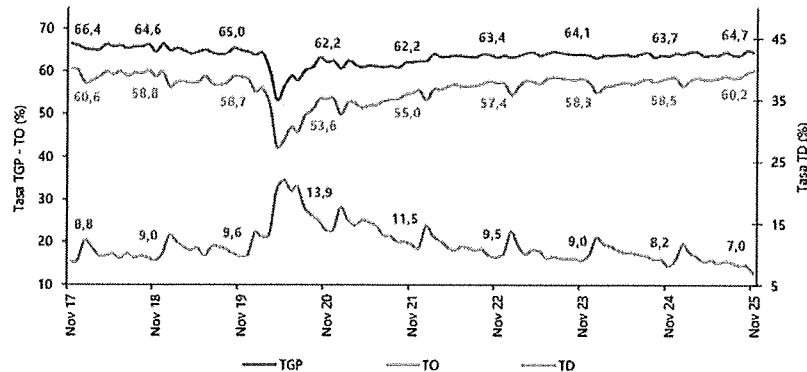
Al cierre de septiembre de 2025, el saldo de la deuda externa del sector privado fue de US\$ 93.450 m (21,5% del PIB). De este monto, el 87,4% correspondió a obligaciones del sector no bancario y el restante 12,6% a deudas adquiridas por instituciones del sector bancario. Con relación al saldo de la deuda del sector no bancario, los préstamos con entidades del exterior representaron el 78,6%, los créditos de leasing financiero el 7,2%, las obligaciones por concepto

de crédito de proveedor el 6,9%, el 7,3% restante corresponde a bonos y pasivos de seguros (Gráfico 8). En cuanto al sector bancario, a septiembre de 2025, las obligaciones por concepto de préstamos representaron el 55,4% de la deuda externa, el 41,2% correspondió a bonos adquiridos por inversionistas extranjeros y el restante 3,4% a depósitos de no residentes.

El sector privado no bancario incrementó sus obligaciones externas en US\$5.599 m (7,4%) frente a lo registrado en diciembre de 2024. Este aumento lo explica, principalmente, los ingresos netos por concepto de bonos seguido de los préstamos (tanto de largo como de corto plazo). Por su parte, el saldo del sector privado bancario se redujo en US\$ 660 m (-5,3%) frente al observado a diciembre de 2024. Este resultado se explica principalmente por el pago de préstamos tanto de corto como de largo plazo, compensados parcialmente por la emisión neta de bonos.

3.2.5. Desempleo

Para el mes de noviembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 7,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (8,2%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a noviembre de 2024 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,2%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,5%).



Gráfica 2. Comportamiento de desempleo en Colombia

3.2.6. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

El salario mínimo se define en Colombia mediante Decreto Nacional, luego de las correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el Gobierno Nacional. Durante los últimos 10 años la variación anual se ha ubicado en el rango del 3,5% y 23,0% con un promedio de 8,3%

Bajo el Decreto 1469 para el año 2026 el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo mensual en \$ 1.750.905 y rige a partir del 1 de enero de 2026. Junto con el auxilio de transporte que se estableció en \$ 249.095 con un pago nominal quedo en \$ 2.000.000.

Año	Salario Mínimo	Auxilio de Transporte
-----	----------------	-----------------------

2026	\$ 1.750.905	\$ 249.095
2025	\$ 1.423.500	\$ 200.000
2024	\$ 1.200.000	\$ 162.000
2023	\$ 1.160.000	\$ 140.606
2022	\$ 1.000.000	\$ 117.172
2021	\$ 908.526	\$ 106.454
2020	\$ 877.803	\$ 102.854
2019	\$ 828.116	\$ 97.032
2018	\$ 781.242	\$ 89.211
2017	\$ 737.717	\$ 83.140
2016	\$ 689.455	\$ 77.700

Tabla 3. Comportamiento del salario mínimo en los últimos 10 años

4. CONTEXTO DE LA CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO

En el engranaje de la administración pública colombiana, la contratación por prestación de servicios se ha consolidado como un instrumento relevante para la gestión del talento humano. Esta modalidad, si bien cumple un papel funcional en el desarrollo de las actividades estatales, ha generado un amplio debate en torno a sus implicaciones sociales, laborales y administrativas, particularmente por su impacto en las condiciones de quienes prestan sus servicios bajo esta figura.

El interés en esta forma de contratación ha crecido de manera sostenida, dada su incidencia directa en la gestión gubernamental y en la prestación de servicios a la ciudadanía. A lo largo del tiempo, la contratación por prestación de servicios ha evolucionado en respuesta a las necesidades cambiantes del Estado, enfrentando retos significativos, pero también ofreciendo oportunidades en términos de flexibilidad administrativa y acceso a conocimiento especializado

¿Qué es la Contratación por Prestación de Servicios?

La contratación por prestación de servicios es un mecanismo jurídico mediante el cual las entidades del sector público colombiano pueden vincular personas naturales o jurídicas idóneas para el desarrollo de actividades específicas relacionadas con el funcionamiento. A diferencia de un empleo tradicional, quienes prestan sus servicios bajo esta modalidad no son empleados directos del Estado, sino que facturan por los servicios prestados por un periodo de tiempo delimitado previamente.

En los últimos años, esta modalidad ha experimentado un incremento significativo en su uso. Si bien ha demostrado ser una herramienta eficaz para la vinculación de expertos en áreas técnicas o especializadas y para la agilización de procesos administrativos, también ha sido objeto de controversia.

La contratación por prestación de servicios ha tejido una trayectoria propia dentro de la administración pública colombiana, adaptándose a las exigencias institucionales y presupuestales del Estado. Para comprender su relevancia actual, resulta indispensable analizar su evolución histórica y normativa, donde se encuentran los fundamentos legales que regulan su aplicación.

Comportamiento en su marco legal:

El sistema legal colombiano aborda la contratación por prestación de servicios a través de diversas leyes y normativas. La Ley 80 de 1993, conocida como el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece los principios básicos y reglas generales que rigen la contratación estatal. Esta ley proporciona el marco general dentro del cual se desenvuelve la contratación pública, incluyendo la modalidad de prestación de servicios.

El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas." (Sentencia C-713 Corte Constitucional, 7 de octubre de 2009, Magistrado Ponente: María Victoria Calle Correa).

La Constitución Política de Colombia como carta de navegación del Estado Colombiano establece en su artículo 2 los fines esenciales a los cuales se debe apuntar con la planeación y ejecución de cada una de las acciones estatales, son ellos, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Es necesario contar con mano de obra que permita materializar a través de diferentes acciones el cumplimiento de los mencionados fines esenciales, es así, como el Estado tiene a su cargo empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios, estos últimos contratados en algunas ocasiones para cumplir funciones y actividades en entidades estatales.

En consecuencia, el legislador consagra positivamente el contrato de prestación de servicios en el numeral 3 artículo 32 de la Ley 80 de 1993, de la siguiente forma:

"Son contratos de prestación de servicios los que celebren las Entidades Estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable."

Mientras que la contratación laboral implica una relación laboral tradicional con derechos y beneficios completos, la contratación por prestación de servicios se basa en un contrato civil por la prestación de un servicio específico, sin generar una relación laboral directa con la entidad contratante.

A lo largo del tiempo, el marco legal ha experimentado ajustes para abordar preocupaciones y desafíos surgidos en torno a la contratación por prestación de servicios. Estos ajustes buscan equilibrar la flexibilidad necesaria para la administración pública con la garantía de derechos laborales mínimos para quienes participan bajo esta modalidad.

La normativa colombiana reconoce ciertos derechos para quienes se involucran en la contratación por prestación de servicios, como el derecho a la remuneración acordada, la libertad para prestar servicios a otros clientes y la autonomía en la ejecución de las tareas contratadas.

No obstante, también establece límites y condiciones para garantizar un marco justo y transparente.

A pesar de estos avances legales, persisten desafíos relacionados con la seguridad laboral y los derechos de los contratistas. El diálogo continuo y posibles ajustes normativos son esenciales para abordar estas inquietudes y asegurar que la contratación por prestación de servicios evolucione de manera equitativa y sostenible.

El marco legal de la contratación por prestación de servicios en Colombia es un componente esencial para comprender cómo opera esta modalidad en el sector público. Su evolución refleja la búsqueda constante de un equilibrio entre la flexibilidad administrativa y la protección de los derechos laborales en un escenario cambiante.

5. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El Municipio de Jamundí cuenta con Profesionales en diferentes áreas, técnicos y bachilleres, los cuales tienen la idoneidad y la experiencia para cumplir con las actividades que se deben realizar en cada una de las áreas de la Corporación Concejo Municipal de Jamundí, dicha experiencia debe ser probada y registrada en cada una de las hojas de vida.

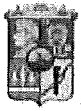
5.1. ANÁLISIS DE PRECIOS

Dada la naturaleza y el objeto contractual a desarrollar, para determinar el valor estimado del contrato, se tuvo en cuenta las actividades encaminadas al cumplimiento del mismo, el perfil requerido para el cumplimiento de estas actividades, la experiencia e idoneidad, plazo de ejecución y capacidad de negociación entre el contratante y el contratista. De acuerdo con lo anterior la Alcaldesa del Municipio de Jamundí, expidió la circular informativa No. 01 del 02 de Enero de 2025, con la cual se, imparten los lineamientos y se establece la tabla de honorarios para la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de personas naturales en el Municipio de Jamundí para la vigencia 2026.

Dicha circular establece la tabla de perfiles y honorarios y constituye una herramienta de carácter vinculante para que los ordenadores del gasto establezcan el valor de los servicios requeridos en cada organismo de la Alcaldía de Jamundí, atendiendo unos requisitos mínimos de idoneidad y experiencia, conforme a las disposiciones legales que rigen la materia.

A continuación, se detalla la tabla de honorarios establecida en la mencionada circular para cada nivel:

Nivel de referencia	Requisitos mínimos	Honorario
Asesor	Título profesional con título de posgrado de Maestría y Ciento veinte (120) meses de experiencia profesional ALTERNATIVAS Opción 1:	\$ 6.500.000



CONCEJO
MUNICIPAL DE JAMUNDÍ
Valle del Cauca

	<ul style="list-style-type: none">• Título profesional con dos (2) títulos de posgrados y Ciento veinte (120) meses de experiencia <p>Opción 2</p> <ul style="list-style-type: none">• Título profesional con un (1) título de posgrado y Ciento ochenta (180) meses de experiencia profesional	
Profesional Universitario	Título profesional y Titulo de posgrado y Noventa y seis (96) meses de experiencia profesional	\$ 6.000.000
	Titulo profesional y Titulo de posgrado y Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia profesional	\$ 5.500.000
	Titulo profesional y Titulo de posgrado y Sesenta (60) meses de experiencia profesional	\$ 5.000.000
	Titulo profesional y Titulo de posgrado y cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional	\$ 4.800.000
	Título profesional y Titulo de posgrado y veinticuatro (24) meses de experiencia profesional	\$ 4.500.000
Profesional	Título profesional y cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional	\$ 4.000.000
	Título profesional y doce (12) meses de experiencia profesional	\$ 3.800.000***
	Título profesional	\$ 3.500.000
Técnico	Título de formación técnica o tecnológica o aprobación de seis (6) semestres de educación superior en las modalidades de pregrado y doce (12) meses de experiencia laboral	\$ 2.800.000**
	Título de formación técnica o tecnológica o aprobación de seis (6) semestres de educación superior en las modalidades de pregrado y seis (6) meses de experiencia laboral	\$ 2.500.000**
Asistencial	Título Bachiller y veinticuatro (24) meses de experiencia laboral	\$ 2.300.000**
	Título Bachiller y seis (6) meses de experiencia laboral	\$ 2.000.000**

	Titulo Bachiller o únicamente doce (12) meses de experiencia laboral	\$ 1.800.000*
--	--	---------------

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.

Es un **contrato de prestación de servicios**, cuando se requiera de actividades que no puedan adelantar los propios operarios de la entidad o se requieran conocimientos especializados, como lo prevé el numeral 3º del artículo 32 del Régimen de Contratación Estatal, el artículo en comento reza: “ **Artículo 32. De los Contratos Estatales.** *Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: ...*

3o. Contrato de prestación de servicios

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados...”

La modalidad de contratación es contratación directa, por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales; contenido en el literal h, numeral 4, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, establece que:

“Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal **así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales**”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)....

De conformidad con la norma transcrita, es claro que:

- Los contratos de servicios profesionales corresponden a aquellos de naturaleza intelectual distintos a los de consultoría, a los que se refiere el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.
- En los contratos de prestación de servicios profesionales, existen también los contratos de

prestación de servicios de apoyo a la gestión, entendiendo por éstos aquellos de naturaleza no intelectual "relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales" de la entidad estatal contratante.

- De conformidad con lo consagrado en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, tanto los contratos de prestación de servicios profesionales como los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, se erigen como causal de contratación directa.
- El contrato a celebrar se trata de un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, en la medida en que el mismo consistirá en la realización de las actividades operativas, logísticas y asistenciales requeridas por el Concejo Municipal de Jamundí para cumplir con su misión y funciones constitucionales, legales y administrativas, **circunstancia que como ya se indicó, autoriza el uso de la modalidad de selección de contratación directa, y en consecuencia la posibilidad para que el Concejo Distrital contrate una persona natural o jurídica que habiendo demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el objeto del contrato a celebrar sin que sea necesario la obtención previa de varias ofertas**, al tenor de lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015.


7. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL

El proyecto necesita: (alguna o las dos) Supervisión ☒ Interventoría ☐

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el Concejo Municipal realizará la supervisión del contrato que se celebre a través del servidor público que se designe para ello.

La vigilancia y el seguimiento a la ejecución del contrato de consultoría serán adelantadas mediante la figura de la Supervisión, la cual estará de la titular del área de que designe el Presidente de la Corporación.

Para constancia se firma en Jamundí, Valle del Cauca, a los Nueve (09) días del mes de Enero de 2026.



LINIBETH OIDOR GRANADA
Presidenta del Concejo
Municipio de Jamundí

